

El COSEP también es un actor político



[Manuel Orozco](#)

12 de septiembre 2016

El consenso nacional e internacional que el COSEP se ha constituido en el ente social con mayor espacio de entablar un vínculo con el gobierno de Daniel Ortega es indisputable. Si bien es cierto que este gremio formalmente no es partidista e ideológico, la organización hace política.

Su relación con el entorno nacional, el tipo de arreglo no escrito al que llegó con Ortega, que como dice Michael Shifter surge “bajo el entendido de que no se meterán en política, y en correspondencia, Ortega les dejará hacer sus negocios con poca interferencia y mínimos impuestos,” son actos políticos.

De igual forma, su política se extiende a la anuencia u omisión respecto a la concentración del poder político del régimen actual. De ahí que hay una responsabilidad del COSEP de definir abiertamente su posición.

Ante los abusos de autoridad de Ortega, guardar silencio es sumisión y lealtad, hacerse cómplice del régimen a cambio de los favores que éste le ofrece. Por otro lado, la crítica constructiva y comprometida hoy día constituiría un pacto político para el desarrollo y el cambio: para nadie, ni para el COSEP, está en disputa que Daniel Ortega esté gobernando autoritariamente. Proclamarlo de forma pública y transparente, es el primer paso para ponerle un límite al autoritarismo

La indefinición del COSEP es complicidad, pero también es un legado para los herederos de sus empresas. Al fin y al cabo, son los hijos de los empresarios del COSEP que están recibiendo las instituciones viciadas del Ortegismo.

Los favores del régimen al sector privado.

Aunque el COSEP razona su relación con Ortega como un acto comedido ante el riesgo político de entrar en otro conflicto, la razón principal por la que COSEP ha pactado con Ortega anteriormente estriba en un acuerdo de conveniencia para la gobernabilidad económica. Este acuerdo básicamente consiste en que Daniel Ortega otorga el favor al gremio empresarial de darle trato preferencial a ciertas empresas, a actividades económicas emergentes, y le permite opinar y llegar a acuerdos sobre legislaciones y políticas económicas.

Este es un favor clave porque desde la perspectiva del COSEP y ante un estado ineficiente e inefectivo, la línea directa del presidente hacia el gremio corta trabas que de otra forma interrumpirían el crecimiento del país. Este favor trae beneficios y costos. El beneficio ha sido el de operar con cierta libertad, y aunque el gremio del COSEP realmente no representa a más del 5% de todo el empresariado nicaragüense, en un país donde más de dos tercios de las empresas son de por sí informales, las ventajas a este grupo son formidables. Por ejemplo, bajo el gobierno de Ortega, las exoneraciones fiscales que representan más del 6% del PIB, a pesar de las objeciones del Fondo Monetario Internacional.

El precio por este favor ha sido el silencio ante los abusos de autoridad y el uso de la excusa del riesgo moral. La dirigencia reconoce ese precio, un silencio a cambio de “volver a poner de pie la economía, para crear empresas, para generar el empleo que la población demanda, para reconstruir de las cenizas un país que fue dejado como tierra arrasada por muchas de esas voces que hoy buscan que campee nuevamente la bandera de la confrontación y la destrucción en nuestro país.” Es decir, aceptar la misma bota militar que oprimió en el pasado a cambio de una cena succulenta.

Los miembros y líderes del COSEP no necesitan y no tienen por qué hacer campaña política, ese no es el punto. Pero su responsabilidad base está en proponer una agenda para la reforma política de este país como condición necesaria para el

crecimiento económico. El liderazgo sostiene que han “puesto la institucionalidad, el desarrollo económico y el desarrollo social como prioridades en nuestra agenda gremial empresarial con convicción y firmeza.” Para ello resaltan algunos indicadores pero esconden otros, y concluyen con un decálogo de sus principios.

Para llevar a cabo esos principios será importante verificar el compromiso. Un método para ello consiste en comprometerse en cinco puntos clave: exigir al estado el respeto al estado de derecho, comprometerse con el gobierno en promover un desarrollo económico diferente, instar al presidente Ortega a formar un diálogo nacional que verifique el cumplimiento del buen gobierno después de las elecciones.

El estado de derecho

Tanto la confianza, como el ejercicio mismo del estado de derecho en Nicaragua, es deplorable. El sistema judicial no solo está cooptado por fichas claves del círculo de Ortega, pero su funcionamiento es lento e ineficiente. El COSEP sabe que la propiedad privada, el activo más importante del empresario, está en peligro. En un estudio reciente copatrocinado por el COSEP, se constató que cerca de la mitad de los emprendedores nicaragüenses creían que su propiedad no está protegida por el estado, que la solución de controversias es ineficiente, que hay incumplimiento a las leyes y que hay corrupción en el registro de la propiedad. También reconocen los empresarios la imposibilidad de formalizar sus empresas, y casi la mitad no confía en la oficina de tributación, la DGI, sea por corrupción o ineficiencia.

La responsabilidad del COSEP ante su gremio es asegurar que el estado proteja los derechos de sus miembros, su propiedad. Para ello tiene como obligación exigir al estado de Ortega que aumente su eficiencia burocrática, los controles de cumplimiento legal contra la corrupción, y la transparencia en la gestión pública, tanto para la asignación de contratos como para la protección de acuerdos comerciales.

Una estrategia de desarrollo más inclusiva

La situación económica de Nicaragua no es óptima. Aunque el país ha crecido, no está sacando a nadie de la pobreza. El país continúa viviendo en desigualdad, pobreza y migración, pero no en desarrollo. El ingreso promedio del nicaragüense es prácticamente el mismo hace diez años, e igual de precario, de menos de 150 dólares al mes.

Entre los factores de esta situación está la baja calificación de la fuerza laboral, el gigantesco tamaño de la economía informal del empresariado nicaragüense, y un enfoque hacia la inversión en actividades de baja rentabilidad. La responsabilidad del COSEP está en exigir al estado un cambio en su compromiso con el desarrollo y reconsiderar sus estrategias de inversión. Cuestionar la naturaleza de subsidios que compran votos y apoyo, y apostarle al capital humano que está muy rezagado. El nicaragüense promedio no solo vive de muy poco, pero su formación es inferior al cuarto grado y su salud está en riesgo diariamente.

Agenda nacional y verificación

Dentro del esfuerzo por cumplir con esos diez principios es clave que exista un consenso nacional en el país sobre lo que beneficia a sus ciudadanos. De ahí que la capacidad de convocatoria de COSEP ante el gobierno debería incluir un esfuerzo por crear una agenda nacional que aborde y exija un cumplimiento a estándares de respeto al estado de derecho, a las reglas del juego democrático y que identifique un modelo de desarrollo incluyente. El COSEP tiene razón, el país necesita de un diálogo, y no de confrontación, y tanto el presidente como el resto de los actores políticos y sociales tienen responsabilidad de identificar puntos en común, en vez de probar sus fuerzas. No se trata de deslegitimar y dismantelar el poder político de Ortega (aunque para unos ese sería un buen paso). Pero al menos es importante iniciar una etapa de reformas políticas que legitimen a la oposición, que no intimiden a la sociedad civil y que sea fiscalmente responsable de los gastos.

La dirigencia empresarial ha sido clara en manifestar su posición, y sus diez principios representan un rechazo al clientelismo y el favoritismo del gobierno actual. Ahora queda en sus manos hacerse cargo de practicar esos principios y abandonar el riesgo moral.

Los dilemas del presidente



¿Cómo ganar con tantos o más votos que en 2011 y cómo mantenerse en el poder, de forma consecutiva?

Desde principios de este año Daniel Ortega ha incrementado la presión política y los conflictos sociales. Estos problemas emanan de maniobras del gobierno que reflejan los retos con los que se está enfrentando. Daniel Ortega se enfrenta con un doble enigma primero, de cómo ganar (no de si va a ganar) las elecciones de 2016, lo cual requiere identificar qué métodos utilizar. Segundo, cómo mantenerse en el poder bajo las circunstancias actuales en las que tiene un fuerte control político junto a una muy pequeña coalición que lo apoya y que está aminorándose.

Las maniobras recientes

Durante el año 2016 el gobierno del presidente Ortega ha aumentado la represión. Ha incrementado la intimidación y represión contra varios grupos que conforman la sociedad civil (incluyendo expertos extranjeros), realizando más detenciones de activistas que protestan la construcción del Canal, o grupos campesinos e indígenas que se defienden contra la posible confiscación de sus tierras. Además, el gobierno se ha asegurado a través de instituciones del estado de limitar la legitimidad de partidos políticos claves, despojando a Eduardo Montealegre de su estatus de representante jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI). El presidente no solo ha cuestionado la legitimidad de la observación electoral, sino que el Consejo Supremo desautorizó a instituciones como el Centro Carter y Ética y Transparencia para participar en la observación electoral. De igual forma el presidente ha aumentado sustancialmente su retórica anti-Estados Unidos y su discurso antimperialista. Esto es visible en acciones que van desde su negación y crítica al libre paso a cubanos por Nicaragua hasta su crítica al 'injerencismo' de organizaciones múltiples, incluyendo la expulsión del PNUD, o amenazas de expulsar a la representación de la Unión Europea.

El control casiabsoluto

Tanto la comunidad internacional como sectores nacionales se preguntan ¿por qué Daniel Ortega ha expandido su represión (no es nuevo el que encarcele a dirigentes, intimide organizaciones sociales, o expulse a expertos internacionales)? Algunos consideran que lo ha hecho por temor a perder las elecciones y otros por estar actuando irracionalmente.

Esta pregunta se torna más relevante considerando que desde 2007 se observa que el presidente Ortega ha consolidado su autoridad política de manera casi absoluta, y la comparte con un pequeño círculo de poder.

El presidente Ortega ha excedido su autoridad dentro del entorno democrático mediante su expansión del control político. Él se mantiene fiel a lo que Bruce Bueno de Mesquita en el *Manual del Dictador* llama las cinco reglas del éxito del control político, a saber, mantener su autoridad con el apoyo de un pequeño círculo del poder, mantener el clientelismo político activo con los votantes, tener control efectivo del dinero, compensar a sus socios lo suficiente para mantener su lealtad, y respetar la riqueza de sus aliados.

Por ejemplo, el presidente con el apoyo de un pequeño grupo de instituciones, tales como el líder de la autoridad electoral, los magistrados y jueces de la corte suprema, la policía y el ejército, y el asesor económico del presidente, ejerce su autoridad. La autoridad legislativa, en control de su partido, no representa una fuente de poder, sino un apoyo subsidiario.

De esta forma, logra cooptar a sectores influyentes de la oposición política y de la sociedad civil mediante el uso del sistema legal para limitar su margen de maniobra. Los intimida con leyes que pueden atentar contra su funcionamiento o, por ejemplo, favorece la adquisición económica de medios de comunicación para silenciar a la disidencia.

Mediante el uso de recursos del Estado, los subsidios tales como Hambre Cero que han beneficiado a más de 100,000 personas van acompañados de un mensaje en pro del gobierno. Por ejemplo, los 20 municipios más beneficiados por el programa en el año 2007 provenían de diversos partidos políticos, pero esos mismos municipios ya en el año 2011 era 100% sandinista.

La relación con la policía, un cuerpo represivo tradicionalmente pacífico, va acompañada de un acuerdo con el nombramiento extra legal de la primera comisionada y directora de la policía, en la que esta institución compromete su neutralidad política a cambio de favores al gobierno y partido, lo que causa su desprestigio. Desde 2007, Nicaragua es talvez el país en Centro América con más muertes políticamente motivadas: solo en el 2015 hubo más de 40 muertes, casi el 10% de todos los homicidios del país. Además, hay más impunidad en su cuerpo policial, y un mayor control policíaco de la protesta social en las calles. Como dice Roberto Orozco, “la PN ya funciona como policía sandinista.”

Con el control judicial, electoral, económico, político de la oposición y el monopolio de la fuerza, el presidente Ortega posee una autoridad casi absoluta. Como dice un colega del Diálogo Inter Americano, Ortega representa la dictadura perfecta ¿por qué entonces aumentar la represión?

El dilema: cómo ganar y continuar gobernando

A todo líder, demócrata o no, le importa llegar al poder, mantenerse y controlar la riqueza del país. La diferencia está en el método. El presidente Ortega ha utilizado el sistema legal con el apoyo de su círculo de poder para ganar y mantenerse en el poder. Mientras tanto, mantiene control de la riqueza, ya sea, a través del presupuesto, a través de favores a su familia, y en alianza con el sector privado.

Con un control férreo del poder, el presidente Ortega se enfrenta a dos dilemas, cómo ganar y cómo gobernar una vez lograda la victoria.

Las maniobras recientes ofrecen algunas claves de su cálculo político racional de cómo proceder.

En el primer paso, Daniel Ortega quiere ganar con tantos o más votos que en la elección del 2011. Para lograrlo necesita asegurarse de controlar a la oposición al punto que esta no tenga capacidad de ser una amenaza real. De ahí que invalida la legitimidad de Montealegre.

También necesita debilitar la protesta social sobre la construcción del canal porque su reputación y credibilidad durante las elecciones serán constatadas con el desarrollo de este gran proyecto—si es que algo llegue a suceder en los próximos cuatro meses. Por ello ha detenido a manifestantes y líderes, y expulsado a extranjeros, aumentando la represión policial.

El presidente necesita también de asegurar un apoyo internacional, mediante el control de quien representa la observación de la comunidad internacional. Las democracias industrializadas representan una molestia para el presidente, por lo que su desprestigio y expulsión es clave. Mientras tanto, decide traer a sus amigos del bloque ALBA.

Con estos tres controles, Daniel Ortega tiene garantizada una victoria segura, con un mínimo del 50% de los votos.

El segundo dilema es más complicado; ¿cómo seguir gobernando? El tema aquí no es gobernar, pero mantener el mismo nivel de control con los aliados actuales. Sin embargo, hay dos problemas. Con el control casi absoluto resulta difícil aumentar más su poder, esta situación más bien resalta una realidad que es cómo mantenerse con este nivel de influencia. El esfuerzo requiere de mayor represión o de extender o abrir el círculo político a otros sectores del país.

El aumento de la represión puede acarrearle a Ortega mayores costos porque su popularidad decaerá y el apoyo internacional disminuirá (la ayuda venezolana es probable que decaiga y esto limite sus subsidios). Esto le deja con la opción de abrirse, de introducir alguna reforma política o pacto con otro sector.

El cálculo político es clave, por ejemplo, muchos de sus aliados actuales (en la Corte, en el CSE, por ejemplo) estarán desapareciendo de la vida política en los próximos años o hasta de forma física por razones de edad. De ahí que la negociación con nuevos cuadros es importante y la reforma política podría ser una opción. Además, otra opción importante será algún tipo de renegociación con los líderes del COSEP quienes poco a poco han aumentado su influencia y relación con el gobierno, no solo para mantener una estabilidad macroeconómica, pero para lograr acuerdos económicos de inversión.

De ahí que la victoria electoral de Ortega con una gran mayoría le dará el apalancamiento necesario para identificar y seleccionar a sus piezas claves que le permitan seguir gobernando. Daniel Ortega no es conocido por introducir reformas, sino por profundizar su poder. Para eso necesita fortalecer su equipo con piezas renovadas y formar nuevas alianzas. De ahí que la búsqueda de alianzas es esencial. La lista de nombres no es larga y no está oculta. No viene del ejército, ni de la policía, o la iglesia y no puede venir de los partidos desprestigiados ni de la sociedad civil. Quedan algunos líderes en el sector de la justicia y el sector privado.

Tampoco está claro si el COSEP quiere mantener esa alianza ante un gobierno más represivo, o si optarán por presentarse como agentes de cambio. Paradójicamente, el COSEP es el gremio mejor posicionado en el país, por encima de los partidos políticos, la sociedad civil, y las instituciones, para negociar con Ortega, y promover reformas políticas. Sin embargo, COSEP no es una entidad política y se ha debilitado sustancialmente desde que el equipo Ortega-Murillo redujo más su círculo de poder. El punto clave para ellos es qué proponer y cómo negociar con el gobierno, si la oportunidad se presenta.

A pesar de estas opciones, no hay garantías de que Daniel Ortega logrará gobernar exitosamente después de ganar estas elecciones. Estará más desgastado, con menos simpatía popular ante un eventual fracaso en la construcción del canal, con menos recursos porque la ayuda venezolana disminuirá, y con menos oportunidades de apalancamiento porque habrá menos actores con quienes pactar. Sus nuevas alianzas podrán tener un propósito temporal, pero resulta difícil vislumbrar un buen gobierno después de la próxima reelección. El presidente Ortega está arriesgando más su capital político, de lo que podría perder con introducir reformas políticas.

**Politólogo. Investigador del Diálogo Interamericano en Washington D.C.*